

**DAYRO PEREZ BETANCURT**  
**ABOGADO UNIVERSIDAD CENTRAL DEL VALLE**  
**ESPECIALISTA EN DERECHO ADMINISTRATIVO**  
**UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI**

Tuluá Valle, Mayo 19 de 2.017

Señor:

**JUEZ DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (REPARTO).**

Buga Valle.

**REF: DEMANDA EN ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO.**  
**DTE: CIELO ARIAS RUIZ.**  
**DDO: EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN.**

**DAYRO PÉREZ BETANCURT**, mayor de edad vecino del Municipio de Tuluá Valle, identificado con C.C.No. 16.352.267 de Tuluá Valle, Abogado Titulado y en Ejercicio con T.P.No. 66.386 del C.S.J., obrando en nombre y representación de la señora **CIELO ARIAS RUIZ**, también mayor de edad, vecina del Municipio de Anserma Nuevo Valle, identificado con la C.C.No. 31.202.119 de Tulúa Valle, quien actúa en su propio nombre; por medio del presente escrito de la manera más comedida me permito presentar ante su Despacho **DEMANDA EN ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**, en contra del **DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - SECRETARIA DE EDUCACIÓN**, por intermedio de sus representantes legales, o quien haga sus veces; fundamentándome en los hechos que narrare más adelante.

**DESIGNACION DE LAS PARTES:**

Para el caso que nos ocupa las partes dentro de este trámite procesal son las siguientes:

**DEMANDANTES:**

Actuará al interior de este proceso, la señora **CIELO ARIAS RUIZ**, mayor de edad, vecina del Municipio de Anserma Nuevo Valle, identificada la con C.C.No. 31.202.119 de Tulúa Valle, quien puede ser notificada en la Calle 5 No. 4 - 70 del Barrio el Centro del Municipio de Anserma Nuevo Valle, o a través del teléfono 3103744894.

**PARTE DEMANDADA:**

Calle 25 No. 26 - 42 Tuluá Valle  
Tel: 232 14 82 Cel: 315 505 54 50  
Email: dayroperez\_20@hotmail.com

**DAYRO PEREZ BETANCURT**  
**ABOGADO UNIVERSIDAD CENTRAL DEL VALLE**  
**ESPECIALISTA EN DERECHO ADMINISTRATIVO**  
**UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI**

Como partes demandadas al interior de este proceso actuaran las siguientes entidades:

**EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN**, por intermedio de su representante legal, o quien haga sus veces; quienes pueden ser notificados en la Carrera 6 entre 9 y 10 Edificio San Francisco del Municipio de Cali Valle, o a través del teléfono 6200000.

**CALIDAD DE INTERVINIENTE:**

Conforme a las normas vigentes y en calidad de intervinientes actuaran las siguientes entidades:

**LA AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO**, por intermedio de su representante legal o quien haga sus veces; puede ser notificada en la Calle 7 No. 75 - 66 Piso 6 de Bogotá D.C, o en el teléfono 2558955.

**EL MINISTERIO PÚBLICO**, representado por la Procuraduría General de La Nación, a través de los Procuradores Delegados ante los Tribunales Contenciosos Administrativos; quien puede ser notificado en la Carrera 9 No. 8 - 56 del Municipio de Cali Valle, o a través del teléfono 3908383.

**PRETENCIONES:**

1. Declarar Nulo el Acto Administrativo contenido en el Oficio identificado con el número 0080025-257249 calendado 10 de Enero de 2.017, dentro del radicado SADE 1023625, por medio del cual **EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - SECRETARIA DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA**, por intermedio de la Oficina de Prestaciones Sociales, y firmado por el Doctor **DIEGO VARELA MARTÍNEZ**, Profesional Universitario, Área de prestaciones sociales, negó la petición incoada y radicada el 29 de septiembre de 2.017, por mi mandante la señora **CIELO ARIAS RUIZ**, mayor de edad, vecina del Municipio de Anserma Nuevo Valle, identificado con la C.C.No. 31.202.119 de Tulúa Valle, con el objetivo de que se reconociera y pagara la sanción moratoria, reglamentada en La Ley 1071 de 2006, la cual modifíco La Ley 244 de 1.995, por el no pago oportuno de las cesantía e intereses a las cesantías, a que esta tenía derecho, como única heredera de su hermana la señora **MARIA LUCERO ARIAS RUIZ**, por haber laborado para la Institución educativa **NEMECIO RODRIGUEZ**, del Corregimiento de Fenicia del Municipio de Riofrío Valle.

Calle 25 No. 26 - 42 Tulúa Valle  
Tel: 232 14 82 Cel: 315 505 54 50  
Email: dayroperez\_20@hotmail.com

**DAYRO PEREZ BETANCURT**  
**ABOGADO UNIVERSIDAD CENTRAL DEL VALLE**  
**ESPECIALISTA EN DERECHO ADMINISTRATIVO**  
**UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI**

2. Que como efectos de lo anterior, se le restablezca el derecho a mi representada, ordenándose al **EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - SECRETARIA DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA**, por intermedio de su representante legal, o quien haga sus veces, que a título de sanción conforme a lo contemplado en el parágrafo único del artículo 5to de la Ley 1071 de 2.006, modificatoria de La Ley 244 de 1.995, mediante el respectivo acto administrativo, se reconozca y pague a título de sanción la suma de **VEINTITRES MILLONES CIENTO TRECEMIL SECENTA Y OCHO PESOS M/C (\$23.113.068=)**, la cual resulta de multiplicar un día de salario que devengaba la hermana de mi mandante, a razón de **CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/C (\$14.564=)**; ello con fundamento en la copia de la certificación de salarios expedida por la pagadora, fechada 19 de Diciembre de 2011, por los 1.587 días en mora en que se encuentra la Gobernación de Valle del Cauca en el pago de esta prestación Social, conforme a los hechos narrados en esta Demanda, más los que se generen a partir de la presentación de la demanda y hasta que se verifique el pago.
3. Que en el fallo se ordene que los valores reconocidos, se les apliquen los incrementos decretados por el Gobierno Nacional, año por año a partir de la fecha del fallecimiento de La señora **LUCERO ARIAS RUIZ**, y hasta que se verifique el pago, valores que deberá de ser indexados de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente, a partir de las fechas en que la sanción se ha hecho exigible.
4. En caso de oposición condenar en costas y agencias en Derecho a la Parte Demandada.
5. Ordenar las demás actuaciones de Ley.

**HECHOS:**

1. Que la señora **CIELO ARIAS RUIZ**, era la única hermana legítima de la hoy fallecida la señora **MARIA LUCERO ARIAS RUIZ**, quien en vida se identificó con la C.C.No. 66.714.816 de Tulúa Valle, y quien falleció el 05 de enero de 2.006.
2. Que la señora **MARIA LUCERO ARIAS RUIZ**, al momento de su deceso se encontraba laborando para La Secretaria de Educación del Departamento del Valle del Cauca, prestando sus servicios como docente, del sistema de básica primaria, en La Institución Educativa Nemesio Rodríguez del Corregimiento de Fenicia del Municipio de Riofrío Valle.

Calle 25 No. 26 - 42 Tulúa Valle  
Tel: 232 14 82 Cel: 315 505 54 50  
Email: dayroperez\_20@hotmail.com

**DAYRO PEREZ BETANCURT**  
**ABOGADO UNIVERSIDAD CENTRAL DEL VALLE**  
**ESPECIALISTA EN DERECHO ADMINISTRATIVO**  
**UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI**

3. Que no obstante de manera anterior a la petición a la que he hecho referencia, haberse efectuado varios trámites ante las Entidades ya referidas, para el caso que nos ocupa, mi Mandante, en calidad de heredera legítima de La Causante, y a través de apoderado judicial, radico, ante La Oficina de Prestaciones Sociales del Magisterio, petición en solicitud de Reconocimiento y pago de las prestaciones sociales a las que se ha hecho alusión, el 3 de febrero del año 2012.
4. Que luego de múltiples actuación ante la Oficina de Prestaciones Sociales del Magisterio, y ante la Fiduprevisora, mediante el ejercicio del derecho de petición ya referido, además de Instaurar Tutelas, en contra de las dos entidades aquí referidas, se logró obtener el reconocimiento de las prestaciones sociales, a que tenía derecho la docente, mediante la resolución identificada con el número 0148 del 28 de enero de 2015.
5. Que la petición a que se ha hecho referencia en el hecho anterior, de conformidad con la Ley 1071 de 2.006, modificatoria de la Ley 244 de 1.995, normas vigentes para la época debió de ser resuelta, mediante el respectivo acto administrativo dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de su radicación, mediante la expedición del respectivo acto administrativo, que para el caso que nos ocupa y teniendo en cuenta que la petición se radico el 03 de febrero de 2.012, los 15 días deberán de contarse a partir del 06 de febrero de la misma anualidad así: 06, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23 y 24 del mes de Febrero de 2012.
6. Que de igual manera la norma antes descrita establece que una vez resuelta la petición la entidad obligada a reconocer las cesantías y los intereses a las mismas; esta tiene un término de cuarenta y cinco (45) días para cancelar las mismas y para el caso que nos ocupa, los 45 días de que habla la norma se comenzaran a contar un día siguiente a la fecha en que debió de ser expedido el acto administrativo; ósea el 27 de febrero del año 2012; o sea que los 45 días se contarán así: 27, 28 y 29 de Febrero del año 2012; 01, 02, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 y 30 del mes de Marzo de 2012; 02, 03, 04, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 y 30 del mes de Abril de 2012; 02, 03, del mes de Mayo de 2012. Pero la petición no fue resuelta.
7. Que no obstante mediante el acto administrativo referido en el hecho cuarto, haberse reconocido las prestaciones sociales a mi mandante, la resolución identificada con el número 0148 del 28 de enero 28 del año 2015, la cual según el contenido de la notificación por aviso identificado, identificado con el No. 45

Calle 25 No. 26 - 42 Tuluá Valle  
Tel: 232 14 82 Cel: 315 505 54 50  
Email: dayroperez\_20@hotmail.com

**DAYRO PEREZ BETANCURT**  
**ABOGADO UNIVERSIDAD CENTRAL DEL VALLE**  
**ESPECIALISTA EN DERECHO ADMINISTRATIVO**  
**UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI**

del 14 de mayo del año 2015; solo se logró obtener el pago efectivo el 16 de septiembre del año 2016.

Cabe anotar que la Notificación a que se ha hecho referencia en el inciso anterior, se efectuó violentando en debido proceso, contemplado en el código contencioso administrativo. Ello debido a que no obstante en La Gobernación contar con la información donde se debía efectuar dicha notificación, esta actuación no se realizó. Y solo se tuvo conocimiento de las actuaciones adelantadas por La secretaria de Educación, luego de varios requerimientos efectuados por mi mandante a través de su apoderado.

8. Que de igual manera la norma en mención contempla, que en el evento, de que las cesantías a que he hecho referencia no sean canceladas de manera oportuna y en el término antes enunciado, la entidad responsable; tendrá que cancelar a título de sanción, un día de salario por cada día de retardo y como se desprende del contenido del hecho anterior; el día de retardo deberá de comenzarse a contar a partir del día siguiente a la fecha en que debieron de cancelarse las prestaciones sociales, ósea el 04 de Mayo de 2012, hasta la verificación del pago el cual tuvo ocurrencia el 16 de septiembre del año 2016.
9. Que del contenido de los hecho anterior se desprende que hasta la fecha de presentación de este escrito; La Gobernación del Valle del Cauca, por intermedio de La Secretaria de Educación, se encuentra en mora de cancelar un total de 587 días, los cuales tendrán que ser multiplicados por el salario promedio, devengado por la docente siendo el resultado total, el valor de la sanción.
10. Que con el objetivo de obtener el pago de la sanción ya referida, mediante escrito radicado el 29 de septiembre del año 2016, en La Ventanilla Única de La gobernación de Valle del Cauca, se solicitó el reconocimiento de la sanción a la que se ha hecho referencia, solo obteniendo respuesta mediante el oficio identificado con el número 0080-025-257249 de enero 10 del año 2017, el cual se recibió en mi Oficina de Abogado el 12 de febrero del año 2017, de manera posterior a la fecha que se presentó y radico, el escrito de convocatoria a conciliación, hecho que motivo que para esa época había surgido a la vida jurídica, la figura del Silencio Administrativo Negativo, reglamentado en el artículo 40 del C.C.A. Pues a la fecha han transcurrido más de tres meses, desde la fecha en que se radico la petición, a la fecha, a la fecha de presentación de esta solicitud y fue con ese fundamento que se planteó la convocatoria a conciliación.

Calle 25 No. 26 - 42 Tuluá Valle  
Tel: 232 14 82 Cel: 315 505 54 50  
Email: dayroperez\_20@hotmail.com

**DAYRO PEREZ BETANCURT**  
**ABOGADO UNIVERSIDAD CENTRAL DEL VALLE**  
**ESPECIALISTA EN DERECHO ADMINISTRATIVO**  
**UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI**

11. Que si tenemos en cuenta el salario promedio que devengaba mi mandante, el cual, para la época ascendía, para la fecha del fallecimiento más o menos a la suma de **CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/C (\$14.564=)**, Toda vez que la asignación básica de La Docente ascendía a la suma de **CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS QUINCE PESO M/C (\$436.915=)** mensuales, por consiguiente el monto de la sanción total se obtendrá de multiplicaran los días en que se encuentra en mora la entidad Demandada a la fecha de presentación de esta demanda; por el salario diario, y si tenemos en cuenta que los día en mora suman 1.587, los cuales multiplicados por el monto del salario diario nos da un valor que asciende a la suma de **VEINTITRES MILLONES CIENTO TRECE MIL SESENTA Y OCHO PESOS M/C (\$23.113.068=)**, suma que deberá de ser indensada de conformidad como lo establece el C.C.A.
12. Que luego de revisado el contenido del el oficio identificado con el número identificado con el número 0080-025-257249 de enero 10 del año 2017, este es contentivo de una falsa motivación, pues del contenido de las normas en que fundamento este escrito se desprende que El Departamento del Valle del Cauca, Secretaria de Educación, lo que debió de realizar fue el pago de la indemnización solicitada.
13. Que como se desprende del poder conferido mis mandantes bajo la gravedad del juramento, manifestaron que el año inmediatamente anterior, no estaban obligados a Declarar renta, por consiguiente no están obligados a cancelar el arancel judicial.

**NORMA QUE SE CONSIDERA VULNERADA:**

Con el actuar de **EL DEPARTAMENTO DEL VALLE - LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN**, a través **DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN OFICINA DE PRESTACIONES SOCIALES**, por intermedio de su representante legales, o quien haga sus veces; debió de cancelar de manera oportuna la prestaciones sociales, a que tenía derecho mi representada, en calidad de heredera y como hermana legitima de la Señora **LUCERO ARIAS RUIZ**, actuación que no realizo, no obstante haber radicado en La Oficina de Prestaciones Sociales, la petición respectiva, el 03 de febrero del año 2012, no obstante de manera anterior y una vez falleció la beneficiaria directa, haberse efectuado varios trámites en el mismo sentido, sin que se tuviera éxito, por lo anterior y teniendo en cuenta la última petición radicada, de ella se desprende que la entidad accionada está vulnerando la Ley 1071 de 2.006, modificatoria de la Ley 244 DE 1.995, norma que establece lo siguiente: **“ARTÍCULO 1o. OBJETO. La presente ley tiene por objeto reglamentar el reconocimiento de cesantías definitivas o parciales a los**

**DAYRO PEREZ BETANCURT**  
ABOGADO UNIVERSIDAD CENTRAL DEL VALLE  
ESPECIALISTA EN DERECHO ADMINISTRATIVO  
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

**trabajadores y servidores del Estado, así como su oportuna cancelación.** Este artículo contempla el objeto y así a quien se dirige la norma y para el caso que nos ocupa, la entidad accionada es de carácter Estatal, al igual que la beneficiaria de las prestaciones sociales, era una funcionaria de carácter estatal, reuniéndose este requisito. **ARTÍCULO 2o. AMBITO DE APLICACIÓN. Son destinatarios de la presente ley los miembros de las Corporaciones Públicas, empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. Para los mismos efectos se aplicará a los miembros de la fuerza pública, los particulares que ejerzan funciones públicas en forma permanente o transitoria, los funcionarios y trabajadores del Banco de la República y trabajadores particulares afiliados al Fondo Nacional de Ahorro.** De lo hechos narrados en la demanda se desprende que la señora Lucero Arias Ruiz, al momento de fallecer ostentaba el cargo de docente, adscrita a la secretaria de educación del departamento del valle del cauca y mi representada, en calidad de beneficiaria, se encuentra facultada, para iniciar esta acción. De otra parte el **ARTÍCULO 4o. TÉRMINOS. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley. PARÁGRAFO. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta deberá informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos pendientes. Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá ser resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo.** Contempla los términos, para resolver la petición y como se narró en los hechos de la demanda La Entidad accionada de manera negligente retardo hasta la saciedad dar respuesta de fondo a las diferentes peticiones incoadas y es por ello que ese actuar la hace acreedora a la sanción establecida en el **ARTÍCULO 5o. MORA EN EL PAGO. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional de Ahorro. PARÁGRAFO. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a este. Y**

**DAYRO PEREZ BETANCURT**  
**ABOGADO UNIVERSIDAD CENTRAL DEL VALLE**  
**ESPECIALISTA EN DERECHO ADMINISTRATIVO**  
**UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI**

es que si se observa con claridad meridiana el contenido del aparte fina de la norma antes trascrita, de ella se desprende que en calidad de accionante, solo se debe de demostrar cuando se hizo efectivo el pago y de las probanzas aportadas en esta demanda, de ellas se desprende que el pago solo se hizo efectivo el 16 de septiembre del 2016.

Y es que del contenido de los acápites anteriores se desprende que el Departamento del Valle del Cauca, a través de la Secretaria de Educación, Área de Prestaciones sociales, al expedir el acto administrativo atacado, y contentivo en el Oficio identificado con el número 0080025-257249 calendado 10 de Enero de 2.017, dentro del radicado SADE 1023625, el cual contempla la siguiente argumentación: ***“Que respecto al reconocimiento y pago de la sanción, considera la Administración Departamental, que no hay lugar al reconocimiento y pago de la sanción moratoria, toda vez que no ha existido, ni existió mala fe del empleador, prueba de ello es precisamente que el Departamento del Valle del Cauca, se acogió a la Ley 550 de 1999 y en la actualidad está cancelando las obligaciones que fueron reportadas en el acuerdo de reestructuración de pasivos, así mismo la imposición de la sanción debe estar condicionada al examen o apreciación de los elementos subjetivos relativos a la buena o mala fe que guiaron la conducta del empleador, apreciación que solo puede ser valorada por la autoridad judicial correspondiente quien será la encargada de dirimir el asunto. Que referente a su petición, debemos traer a colación lo expresado por la honorable Corte referente al fenómeno de la prescripción de las cesantías, prestación que de por si es rogada, debido que solo se aplica su pago al ser solicitadas reuniendo los requisitos para tal fin, y que frente a las mismas en sentencia de unificación se sienta jurisprudencia sobre su aplicación. Que teniendo lo expresado en el marco de la Ley 50 de 1990, referente a las cesantías anualizadas, no se aplica el fenómeno de la prescripción, pues la obligación de su consignación es una fecha determinada que surge de pleno derecho, en virtud de lo dispuesto en la Ley, que le concede el empleador un término perentorio para realizar el depósito en el fondo administrador al que este afiliado el empleado. No obstante, cuando se trate de la consignación de las cesantías definitivas, si la mora no se produce por negligencia del empleador, sino por una causa atribuible al empleado, si procede el fenómeno de la prescripción, pues en tal caso la omisión de este último en cumplir con los requisitos que realiza el empleador, no se puede constituir un beneficio a su favor. En los anteriores términos se precisa que las cesantías definitivas si están sujetas al fenómeno prescriptivo, las cuales se toman desde el momento de la desvinculación del servicio. Por lo antes expuesto se puede concluir que el derecho a las cesantías definitivas a las que alude en su petición, se encuentran prescriptas particularmente a los*”**



**DAYRO PEREZ BETANCURT**  
ABOGADO UNIVERSIDAD CENTRAL DEL VALLE  
ESPECIALISTA EN DERECHO ADMINISTRATIVO  
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

***periodos comprendidos anteriores al 2010. Por tal motivo, considera esta Secretaria, que debido a la inexistencia del derecho y previendo el pago de sumas a las que no existe el derecho, no es procedente su solicitud; se deja a disposición del administrador recurrir a la Justicia Ordinaria si considera que tiene derecho a la petición que alude; toda vez que el reconocimiento y orden de pago se efectuó dentro de las condiciones y se encuentra ajustada a las directrices y parámetros de las normas laborales vigentes”.***

Del contenido del acto transcrito se desprende que El Departamento del valle del cauca, a través de La secretaria de Educación, Oficina de Prestaciones Sociales del Magisterio infringió, el artículo 84 del C.C.A. que a la letra reza **“Art. 84. Modificado Decr. 2304 de 1989, art, 14.** Toda persona podrá solicitar por sí o por medio de representante, que se declare la nulidad de los actos administrativos. Procederá no sólo cuando los actos administrativos infrinjan las normas en que deberían fundarse, sino también cuando hayan sido expedidos por funcionarios u organismos incompetentes, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencias y defensa, **o mediante falsa motivación**, o con desviación de las atribuciones propias del funcionario o corporación que los profirió. También puede pedirse que se declare la nulidad de las circulares de servicio y de los actos de certificación y registro.”

ya que del contenido del mismo se incurrió en una de las causales reseñadas en la norma en mención, al motivar falsamente dicho acto administrativo. Esta manifestación encuentra respaldo en la siguiente argumentación. Si se observa con claridad meridiana el contenido del inciso primero del acto administrativo atacado de él se observa que el Departamento, a través de sus funcionarios, quiere justificar su negligencia en dar respuesta de manera oportuna a la petición, y además pagar dentro de los términos legales la prestaciones sociales solicitadas, en el hecho de que le entidad se encuentra inmersa en la Ley 550 de 1.999. Pero esta manifestación es Falsa. Obsérvese que dentro de las normas vigentes la función de la Entidad Demandada, según las normas aplicables al caso era la de mediante acto administrativo reconocer las prestaciones sociales solicitadas en su momento, y ordenar su pago. Actuación que no se realizó de manera oportuna y quien tenía la facultad para pagar los valores reconocidas, era el Fondo de prestaciones sociales del magisterio, actuación que no se realizó debido a la negligencia de la primera como lo he venido manifestado.

Es de resaltar que no obstante el Departamento del valle estar inmerso en La Ley 550 del 1.999, esto no le impedía expedir dentro de los términos legales el acto administrativo de reconocimiento de las prestaciones sociales, incoadas en su oportunidad, y además mucho menos ordenar el pago de las mismas. Lo anterior teniendo en cuenta que los dineros para cancelar dichas obligaciones son administrados por el Fondo ya referido.

Calle 25 No. 26 - 42 Tuluá Valle  
Tel: 232 14 82 Cel: 315 505 54 50  
Email: dayroperez\_20@hotmail.com

**DAYRO PEREZ BETANCURT**  
**ABOGADO UNIVERSIDAD CENTRAL DEL VALLE**  
**ESPECIALISTA EN DERECHO ADMINISTRATIVO**  
**UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI**

Ahora en lo referente a la mala fe, se observa por parte del suscrito que esta si se presentó ya que de los antecedentes administrativos y de los documentos que se anexan a esta Demanda, se extractara las múltiples peticiones que se efectuaron, para logra obtener el pago. Es más hubo que presentar varia tutelas tanto en contr5a del Departamento, como contra La Fiduprevisora.

En lo que tiene que ver con el contenido del inciso segundo del acto administrativo atacado, esa motivación carece de veracidad. Ello debido a que la petición para obtener el pago de las prestaciones solicitadas, se presentó de manera oportuna y con los requisitos legales, es por ello que con la radicación de cada una de ellas se interrumpía la prescripción.

En lo que tiene que ver con el contenido del inciso tercero, la norma en que se fundamenta el funcionario, ósea La Ley 50 de 1990, no es aplicable para el caso que nos ocupa.

En lo que tiene que ver con el contenido del inciso cuarto, como lo he venido manifestando la negligencia es atribuible al Departamento y ello se demostrara al revisar los antecedentes y la documentación que se aporta, como lo mencione anteriormente.

En lo que tiene que ver con el contenido del inciso quinto, esta motivación el totalmente falsa. Ello se desprende del hecho de que las mismas si bien es cierto fueron canceladas de manera tardía, de las misma se logró el pago y en este caso la petición no se dirigía a obtener el pago de dichos emolumento sino al pago de la indemnización de la sanción por el no pago oportuno de las mismas.

**PRUEBAS:**

Con el objetivo probar los hechos narrados en esta Demanda, solito a Usted señor Juez, Decretar, practicar y tener como medios de prueba los siguientes:

**TESTIMONIALES:**

Con el objetivo probar los hechos narrados en esta Demanda, solito a Ustedes citar y hacer comparecer a su Despacho, a las personas que relaciono a continuación:

**MARÍA PATRICIA PÉREZ BETANCOURTH**, mayor de edad, vecina del Municipio de Tuluá Valle, identificada con la C.C.No. 66.710.813 de Tuluá Valle; quien puede

**DAYRO PEREZ BETANCURT**  
**ABOGADO UNIVERSIDAD CENTRAL DEL VALLE**  
**ESPECIALISTA EN DERECHO ADMINISTRATIVO**  
**UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI**

ser notificada en la Calle 25 No. 26 - 42 del Barrio el Centro, o a través de los teléfonos 2321482 / 3175384654.

**INTERROGATORIO DE PARTE:**

Decretar y practicar un interrogatorio a mi representada, la señora **CIELO ARIAS RUIZ**, mayor de edad, vecina del Municipio de Anserma Nuevo Valle, identificado con la C.C.No. 31.202.119 de Tulúa Valle, con el Objetivo de que esta absuelva las preguntas que el suscrito le efectuar en la audiencia de manera oral, quien puede ser notificada en la calle 25 No. 26-42 de Tuluá Valle, o a través del teléfono 2321482.

**DOCUMENTALES:**

Con el objetivo probar los hechos narrados en esta Demanda, solicito a Ustedes, tener como medios de pruebas los siguientes documentos:

- Poder para actuar.
- Constancia de agotamiento de la etapa prejudicial, efectuado por el Doctor **Diego Felipe Vivas Tobar**, Procurador 60 Judicial para asuntos Administrativos de Cali Valle.
- Oficio calendado 16 de Marzo de 2.017, dirigido al Doctor **Diego Felipe Vivas Tobar**, Procurador 60 Judicial para asuntos Administrativos de Cali Valle, en el cual se anexa oficio número 0080-025-257249 del 10 de enero de 2.017, dentro del radicado SADE 1023625, emitido por la Gobernación del Valle, con fecha de recibido 13 de Febrero de 2.017, con constancia de envió y recibido.
- Copia de petición radicada en la Oficinas de la Gobernación del Valle, el día 29 de septiembre de 2.016, con los anexos que relaciono a continuación:
- Copia de petición de interés particular calendada 02 de Febrero de 2.012, radicada en la Secretaria de Educación Departamental, con sus respectivos anexos.
- Copia de derecho de petición calendado 17 de septiembre de 2.015, dirigido al Jefe Oficina de Prestaciones Sociales del Departamento, radicado en la Gobernación del Valle el día 23 de septiembre de 2.015.
- Copia de requerimiento calendado 16 de Febrero de 2.016, dirigido al Jefe Oficina de Prestaciones Sociales del Departamento, con constancia de radicado.
- Copia de oficio número SADE 960385 del 12 de Febrero de 2.016, calendado 01 de abril de 2.016 y recibido el día 26 de Abril de 2.016.
- Copia de respuesta a oficio número SADE 960385 del 12 de Febrero de 2.016, calendado 27 de Abril de 2.016, radicado 29 de Abril de 2.016.

Calle 25 No. 26 - 42 Tuluá Valle  
Tel: 232 14 82 Cel: 315 505 54 50  
Email: dayroperez\_20@hotmail.com

**DAYRO PEREZ BETANCURT**  
**ABOGADO UNIVERSIDAD CENTRAL DEL VALLE**  
**ESPECIALISTA EN DERECHO ADMINISTRATIVO**  
**UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI**

- Copia de oficio número SADE 980211 del 29 de Abril de 2.016, calendado 20 de Junio de 2.016.
- Copia de petición de interés particular calendada 14 de Junio de 2.016, dirigido a la Secretaria de Educación Departamental, radicado el día 15 de Julio de 2.016.
- Copia de oficio número SADE 186337 con constancia de recibido 27 de Octubre de 2.015.
- Copia de oficio calendado 31 de Mayo de 2.015, radicado 20150170657681, de la Fiduprevisora.
- Copia de petición de interés particular calendada 27 de Junio de 2016.
- Copia de oficio calendado 02 de Septiembre de 2.016 radicado 20160160961521, de la Fiduprevisora.
- Copia de solicitud de información calendado 25 de Julio de 2015, dirigido al Director de Prestaciones Sociales Económica - Pagos, con sus respectivos anexos.

**OFICIOS:**

Se oficie al señor Gerente del Banco BBVA, ubicado en la Calle 12 No. 4 - 79 Edif. Otero de Cali Valle, o a través del teléfono 6440232; con el objetivo de que certifique que fecha hizo efectivo la señora **CIELO ARIAZ RUIZ**, el cheque mediante el cual se le cancelaron las prestaciones sociales, actuación que tuvo ocurrencia el 16 de septiembre de 2016.

Se Oficie a La Secretaria de Educación del Departamento, con el objetivo de que certifique cual era el salario que devengaba la señora Lucero aria en el año 2006 como docente, adscrita a esa entidad y que incrementos se autorizaron año por año a los docentes ubicados en esa categoría, hasta el año 2017.

**CADUCIDAD:**

Conforme a lo establecido en el artículo 161 del C.C.A. en su numeral Segundo, que contempla que La Acción de Nulidad y Restablecimiento del derecho, caduca en cuatro meses, contados a partir del día siguiente en que se notificó el acto administrativo y para el caso que nos ocupa esta actuación tuvo ocurrencia el día 10 de enero del año 2017, según se desprende del oficio identificado con el No.0080-025-0257249, firmado por el Doctor **DIEGO VARELA MARTÍNEZ**, profesional universitario, Área de Prestaciones Sociales, mediante el cual se resolvió de manera negativa la petición. Es de anotar que el oficio antes referido, fue recibido en mi oficina de Abogado el 13 de febrero del año 2017, ósea que los cuatro meses deberán de contarse a partir del 14 de febrero de la presente

Calle 25 No. 26 - 42 Tuluá Valle  
Tel: 232 14 82 Cel: 315 505 54 50  
Email: dayroperez\_20@hotmail.com

**DAYRO PEREZ BETANCURT**  
**ABOGADO UNIVERSIDAD CENTRAL DEL VALLE**  
**ESPECIALISTA EN DERECHO ADMINISTRATIVO**  
**UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI**

anualidad. A ello debe de sumarse el periodo mediante el cual se suspenden los términos, debido a la radicación de la Solicitud de Conciliación, pero como la misma se radico ejerciendo la figura del silencio administrativo. Se tendrá en cuenta la fecha en que se declaró fracasada la conciliación.

De lo anterior se desprende que como la Conciliación se Declaró Fracasada el 3 de mayo del año 2017, los cuatro meses establecidos en norma que regula la figura de la caducidad y a la que hice alusión de manera inicial, deberá de contarse a partir del 4 de mayo del año 2017, los cuales vencen el 04 de septiembre del año 2017.

**REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD:**

Del conformidad con los artículos 35 y 37 de La Ley 640 de 2001 y como se desprende de La Constancia Expedida, el 03 de mayo del año 2017, por el Procurador 60 Judicial I, para asuntos Administrativos, esta etapa se encuentra agotada.

**NOTIFICACIONES:**

Las más las recibiré en la Calle 25 No. 26 – 42 Barrio el Centro del Municipio de Tuluá Valle, o en los teléfonos 2321482 o 315-5055450.

Mi mandante la señora **CIELO ARIAS RUIZ**, puede ser notificada en la Calle 5 No. 4 – 70 Barrio el Centro del Municipio de Anserma Nuevo Valle, o en el teléfono 3207834386.

**EL DEPARTAMENTO DEL VALLE - LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN**, por intermedio de su representante legal, o quien haga sus veces; quienes pueden ser notificados en la Carrera 6 entre 9 y 10 Edificio San Francisco del Municipio de Cali Valle, o a través del teléfono 6200000.

**LA AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO**, por intermedio de su representante legal o quien haga sus veces; puede ser notificada en la Calle 7 No. 75 – 66 Piso 6 de Bogotá D.C, o en el teléfono 2558955.

**EL MINISTERIO PÚBLICO**, representado por la Procuraduría General de La Nación, a través de los Procuradores Delegados ante los Tribunales Contenciosos Administrativos; quien puede ser Notificado en la Carrera 9 No. 8 - 56, o en el teléfono 3908383.

**ANEXOS:**

Calle 25 No. 26 - 42 Tuluá Valle  
Tel: 232 14 82 Cel: 315 505 54 50  
Email: dayroperez\_20@hotmail.com

**DAYRO PEREZ BETANCURT**  
**ABOGADO UNIVERSIDAD CENTRAL DEL VALLE**  
**ESPECIALISTA EN DERECHO ADMINISTRATIVO**  
**UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI**

Me permito anexar al presente escrito, los documentos relacionados en el acápite de pruebas y los poderes para actuar.

**CUANTIA:**

Para efectos de este trámite estimo la cuantía en la suma de **VEINTITRES MILLONES CIENTO TRE CEMIL SESENTA Y OCHO PESOS M/C (\$23.113.068=)**, más los valores que resulte al indexar los salarios que se prueben como sanción.

**ACCIÓN A SEGUIR:**

Se trata de una Demanda de nulidad y restablecimiento del derechos, reglamentada en el artículo 85 del C.C.A.

**COMPETENCIA:**

Es Usted, señor Procurador, competente para conocer de esta solicitud de conciliación, con fundamento en La Ley 640 de 2.001. Ello por la naturaleza del asunto, el domicilio de la parte a quien se pretende demandar y por ser el artículo de Buga donde se prestó el servicio.

**DERECHOS:**

Fundamento esta Demanda en la Ley 640 de 2.001 y demás normas afines y concordantes.

De usted atentamente;

**DAYRO PÉREZ BETANCURT.**

C.C.No. 16.352.267 de Tuluá Valle.

T.P.No. 66.386 del C.S.J.

Calle 25 No. 26 - 42 Tuluá Valle  
Tel: 232 14 82 Cel: 315 505 54 50  
Email: dayroperez\_20@hotmail.com